



# Asamblea General

Quincuagésimo noveno período de sesiones

Documentos Oficiales

**56<sup>a</sup>** sesión plenaria

Miércoles 17 de noviembre de 2004, a las 10.00 horas  
Nueva York

*Presidente:* Sr. Ping ..... (Gabón)

*En ausencia del Presidente, el Sr. Sevilla Somoza (Nicaragua), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.*

*Se abre la sesión a las 10.15 horas.*

## Tema 49 del programa (continuación)

### Los océanos y el derecho del mar

#### a) Los océanos y el derecho del mar

**Informes del Secretario General** (A/59/62, A/59/62/Add.1, A/59/63 y A/59/126)

**Informe sobre la quinta reunión del proceso abierto de consultas oficiales de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar** (A/59/122)

**Proyecto de resolución** (A/59/L.22)

#### b) La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexos

**Informe del Secretario General** (A/59/298)

**Proyecto de resolución** (A/59/L.23)

**Sr. Kuzmenkov** (Federación de Rusia) (*habla en ruso*): La Federación de Rusia asigna gran importancia al examen que realiza la Asamblea de la cooperación relativa a los océanos y el derecho del mar. Este año se cumple el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, en la cual se basan las relaciones contemporáneas entre los Estados respecto del ambiente marino. Coincidimos plenamente con las declaraciones positivas que hemos escuchado hoy sobre la Convención, puesto que es el principal instrumento jurídico internacional en lo que atañe a las actividades marítimas, en el cual se establece un régimen unificado de cooperación sobre los asuntos marinos. Refleja de manera justa y equilibrada los intereses de todos los Estados y coordina las diversas actividades de éstos en las zonas marítimas. Pedimos a los Estados que aún no se hayan adherido a la Convención que se adhieran a ella lo antes posible. Estamos convencidos de que se debería proceder a un mayor desarrollo del derecho marítimo sobre la base de la aplicación del régimen establecido por la Convención de 1982.

Este año ha estado repleto de acontecimientos diversos y actividades relativas al derecho del mar. En cuanto a las actividades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, admiramos el progreso alcanzado en la elaboración del proyecto de normas para la prospección y exploración de sulfuros polimetálicos y crostas de ferromanganeso ricas en cobalto. Sin embargo, tenemos algunas reservas acerca de la conveniencia

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-154A. Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento separado.



de conceder a ese órgano una jurisdicción especial para proteger los recursos biológicos marinos.

Estimamos que sería muy útil desarrollar la cooperación para adoptar medidas ulteriores a fin de que los Estados del pabellón refuercen la vigilancia de los buques que navegan bajo su bandera.

Compartimos la esperanza expresada por muchas delegaciones en cuanto al establecimiento del programa de las Naciones Unidas relativo a los océanos, cuyo objetivo es lograr una mejor coordinación de las actividades de las organizaciones que se ocupan de los asuntos oceánicos y prevenir la duplicación que suele ocurrir, habida cuenta de la extensa red de organizaciones y los enormes desafíos que enfrentan.

La Federación de Rusia acoge con beneplácito la solicitud presentada ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental por el Brasil, así como por Australia —según se nos ha informado hoy—, para demarcar los límites de su plataforma continental. Esperamos con interés el resultado de las solicitudes de Australia y del Brasil ante la Comisión.

También la Federación de Rusia ha pedido la demarcación de límites de la plataforma continental en las zonas del Océano Ártico y el Océano Pacífico. Actualmente, los ministerios y las instituciones pertinentes de la Federación de Rusia están preparando la información adicional requerida por la Comisión, y estamos resolviendo las cuestiones bilaterales surgidas en relación con la solicitud de la Federación de Rusia.

En vista de que en los próximos cinco años la Comisión recibirá aproximadamente 10 solicitudes más de ese tipo, hay que tratar de crear las condiciones propicias para que funcione sin tropiezos y con eficacia, ya que el volumen de trabajo de la Comisión ha aumentado considerablemente.

El Proceso abierto de consultas oficiosas sobre los océanos y el derecho del mar, que celebró su quinta reunión la primavera pasada, ha contribuido de manera significativa a nuestro debate. Es importante recalcar que el gran potencial del Proceso de consultas oficiosas, con la participación tanto de expertos gubernamentales como de representantes de las organizaciones internacionales que tratan este tema, está ayudando a encontrar la debida solución para problemas complejos relacionados con la cooperación mundial sobre los océanos encaminada a identificar formas de interacción a largo plazo. El proceso de consultas ha de realizar un

aporte concreto a la causa del desarrollo sostenible. No obstante, señalamos a la atención los intentos contraproducentes de ampliar el mandato del Proceso de consultas oficiosas para atribuirle funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Convención de 1982. La Asamblea General es muy efectiva en su labor, al igual que lo son las reuniones de los Estados partes en la Convención de 1982.

Quisiera formular unas breves observaciones con respecto a las decisiones adoptadas en la 52ª reunión del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional y al reconocimiento de zonas marítimas de Europa occidental particularmente sensibles. Consideramos necesario subrayar que, al subsanar las lagunas normativas respecto de las zonas especialmente sensibles, el resultado no debe restringir los derechos e intereses legítimos de los Estados. Esto se aplica en particular al principio de la libertad de navegación. Esperamos que se puedan encontrar respuestas a estas cuestiones, teniendo en cuenta los intereses legítimos de todos los Estados, mediante las propuestas del Grupo de Trabajo establecido de conformidad con la decisión del Comité de Protección del Medio Marino con el fin de mejorar las normas actuales de la Organización Marítima Internacional para la determinación de estas zonas marítimas particularmente sensibles.

Otra esfera importante para la cooperación internacional sobre asuntos marinos es el establecimiento de un proceso periódico de evaluación mundial de la condición del medio marino. Los primeros resultados de las deliberaciones sobre ese problema han sido modestos, por así decirlo, y no podemos considerarlos satisfactorios. Es indispensable redoblar los esfuerzos para que se pueda iniciar y completar esa labor a la brevedad posible. En ese contexto, necesitamos establecer un proceso transparente con una estructura clara, evitando al mismo tiempo la superposición de funciones de las organizaciones internacionales existentes que se ocupan de ese tema y la imposición de cualquier otra carga financiera insostenible sobre los Estados.

Uno de los instrumentos clave en el ámbito de la conservación y la ordenación de los recursos marinos vivos y las poblaciones de peces es el Acuerdo de 1995 sobre la conservación y la ordenación de las poblaciones de peces altamente migratorios. La delegación rusa considera con interés la propuesta de celebrar a comienzos de 2006 una conferencia de examen de la

aplicación de la Convención, y nos proponemos participar activamente en el proceso preparatorio y en la conferencia misma.

Para concluir, doy las gracias al Secretario General por los informes tan profesionales que ha presentado a la Asamblea General sobre este tema del programa. La Federación de Rusia acoge con beneplácito los proyectos de resolución sobre los océanos y el derecho del mar y sobre la pesca sostenible (A/59/L.22 y L.23) que se han elaborado. Estoy seguro de que gran parte del mérito corresponde a los coordinadores. Aprovecho esta oportunidad para expresarles nuestro sincero reconocimiento por la labor que han realizado. Apoyaremos la aprobación de los proyectos de resolución presentados a la Asamblea General sobre este tema.

**Sr. Kendall** (Argentina): La delegación argentina se asocia a la intervención pronunciada ayer por el representante de Chile, cuyos puntos de vista compartimos. Deseamos destacar especialmente, como lo han hecho otras delegaciones, la conmemoración del décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La misma establece el marco jurídico fundamental para las actividades realizadas en los océanos y los mares y para su desarrollo sostenible.

Los asuntos que son tratados en el tema 149 "Los océanos y el derecho del mar" son múltiples, complejos y de gran interés para nuestro país. No ahondaremos en ellos debido a que ya lo ha hecho el representante de Chile en su intervención. Sin embargo, deseamos agradecer la excelente labor que han desempeñado los coordinadores de los proyectos de resolución que hoy consideramos: los Sres. Marcos de Almeida, del Brasil, y Jennifer McIver, de Nueva Zelandia, para el tema relativo al derecho del mar y los océanos, así como la Sra. Holly Koehler, de los Estados Unidos, para el tema sobre la pesca sostenible. Agradecemos también a la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos la colaboración brindada en el proceso de negociación. La negociación de los textos de los proyectos es un proceso complejo y largo, atento a la variedad y profundidad de los temas incluidos en los mismos. Por ello, a juicio de nuestra delegación, para las futuras negociaciones se debería prever un calendario de reuniones que no se superponga con las de la Sexta Comisión.

Por último, con relación al tema sobre la pesca sostenible, quisiéramos referirnos brevemente al in-

forme del Secretario General sobre la pesca sostenible (A/59/298), que en su párrafo 151 trata sobre las principales lagunas en la cobertura de las medidas adoptadas actualmente por organizaciones regionales de pesquerías.

Quisiéramos aclarar al respecto que las lagunas identificadas por el Secretario General en el informe no son de carácter jurisdiccional, como parece inferirse del párrafo, sino que se refieren a la constatación de la ausencia de establecimiento de una organización regional de pesquerías dirigida a medidas de conservación. Al identificarse estas lagunas, deberían tenerse presente las causas que están en su origen, tales como las disputas de soberanía pendientes de solución.

**Sr. Gala López** (Cuba): Al cumplirse el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nos complace sobremanera constatar que la misma mantiene una total vigencia y actualidad, reafirmando su carácter universal e importancia fundamental para el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como para el desarrollo sostenible de los océanos y los mares.

Mi delegación pone especial énfasis en la necesidad de reforzar la cooperación internacional entre todos los actores que inciden en la gestión de los mares y los océanos, incluido el intercambio de conocimientos y el fomento de capacidades, que son aspectos de vital importancia para los países en desarrollo. Para mi país, dada su geografía, son de especial interés las cuestiones relacionadas con los mares y océanos y, a pesar de las serias dificultades económicas que afronta, ha realizado y realiza grandes esfuerzos en la implementación de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible y la protección del medio marino con el fin de lograr una aplicación coherente y eficaz de las disposiciones de la Convención.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece el marco jurídico adecuado y universalmente reconocido dentro del cual deben llevarse a cabo todas las actividades sobre los océanos y los mares. Es por ello que llamamos la atención sobre las políticas e iniciativas de algunos Estados que contravienen la Convención, como es el caso de la iniciativa de seguridad contra la proliferación de armas de destrucción en masa. Para llevar a cabo la aplicación práctica de esa iniciativa, en nuestra opinión, se ignorarían las normas generalmente aceptadas sobre la

intercepción de buques y el régimen jurídico sobre los diferentes espacios marítimos.

También deseamos señalar que cualquier actividad comercialmente orientada relativa a la diversidad biológica situada en áreas más allá de la jurisdicción nacional debe regirse por los principios establecidos en dicha Convención, que dispone que la investigación científica marina en la zona debe ser llevada a cabo exclusivamente para fines pacíficos y en beneficio de la humanidad en su conjunto. Al respecto, nos complace el establecimiento de un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, tal como se señala en el proyecto de resolución que aprobaremos en el día de hoy contenido en el documento A/59/L.22.

No deseamos concluir sin antes agradecer los esfuerzos de los coordinadores de ambos proyectos de resolución, así como al Secretario General por su informe sobre el tema de los océanos y el derecho del mar, y también el trabajo realizado por la División de Asuntos Oceánicos y el Derecho del Mar en esta esfera.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): De conformidad con la resolución 54/195 de la Asamblea, de 17 de diciembre de 1999, tiene la palabra la observadora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos.

**Sra. Kimball** (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos) (*habla en inglés*): La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos se complace en celebrar el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es un documento constitucional de enorme transcendencia que, al igual que otros documentos análogos, es susceptible de un mayor perfeccionamiento y desarrollo. La ordenación sostenible de los océanos lo requiere. Más del 70% de los peces recogidos en todo el mundo se pesca hasta el límite sostenible, o lo sobrepasa. Cuando los pescadores buscan nuevas poblaciones de especies que se hallan a mayor profundidad, éstas también empiezan a agotarse.

Las repercusiones de estas prácticas destructivas de pesca para una amplia gama de especies marinas, desde las tortugas y las aves marinas hasta los tiburones y los arrecifes, está bien documentada. En las zonas profundas del mar, la pesca de arrastre en el fondo

ha destruido bancos de coral y ha agotado completamente las poblaciones de peces cuyo hábitat se encuentra en los montes submarinos. La extinción de numerosas especies que se encuentran en los montes submarinos ya se presenta como una probabilidad.

En la mayoría de los casos, los acuerdos regionales para estas actividades pesqueras en alta mar aún se centran estrictamente en los recursos pesqueros y desatienden las capturas incidentales. Ni siquiera existen órganos competentes que regulen esas actividades pesqueras en grandes extensiones de los océanos del mundo.

Estas graves disminuciones y nuevas extinciones tienen un efecto generalizado para la diversidad biológica del mundo. También tienen graves consecuencias para la seguridad alimentaria del mundo y los medios de vida humanos. Además, se ve gravemente socavada la posibilidad de obtener beneficios en el futuro del aprovechamiento sostenible de esos recursos.

Para mantener la productividad de las especies y los ecosistemas marinos no podemos demorar aún más la adopción de un enfoque de ecosistema más integrado de la ordenación de los océanos y las actividades pesqueras. Es indispensable adoptar medidas de prevención. Este será un importante cometido del Grupo de Trabajo ad hoc oficioso de composición abierta que creará la Asamblea General. Será fundamental establecer un programa práctico y concreto para ese Grupo.

La Asamblea General ha reconocido expresamente que la pesca de arrastre de fondo es una actividad destructiva y una amenaza acuciante para los ecosistemas marinos vulnerables. La Unión Mundial para la Naturaleza lamenta que no haya podido llegarse a un acuerdo sobre la adopción de medidas más enérgicas para prohibir esta práctica destructiva en forma provisional en aguas internacionales. La falta de tales medidas a corto plazo significa mayor destrucción y una pérdida de la diversidad biológica de los fondos marinos hasta que los Estados y los órganos regionales puedan llegar a un acuerdo sobre la adopción de medidas apropiadas de conservación y ordenación. La Unión Mundial para la Naturaleza y otras organizaciones de conservación observarán los adelantos que se realicen durante el próximo año.

Otra necesidad urgente es la de crear un proceso mundial de observación y evaluación del estado del medio ambiente marino. Para la diversidad biológica y los ecosistemas de alta mar es útil que en los proyectos

de resolución se pida la realización de más investigaciones, pero una evaluación científica con miras a la adopción de políticas, sobre la base de la información disponible, permitiría establecer un parámetro para las futuras investigaciones y evaluaciones, poner de relieve lo que la comunidad internacional está arriesgando y facilitar el acuerdo en cuanto a las medidas apropiadas que se deben adoptar. En vista de la demora en establecer una evaluación periódica de los recursos marinos mundiales, la Unión Mundial para la Naturaleza exhorta a que se aliente a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, en colaboración con organizaciones pertinentes y en consulta con los Estados, a que prepare tal evaluación lo antes posible.

En el mediano plazo, un enfoque basado en los ecosistemas significa una transformación importante de la mayoría de las organizaciones regionales de ordenación de la pesca, sobre la base de los principios y las medidas del Acuerdo sobre las poblaciones de peces y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Con ello se aseguraría el trato equitativo de todas las actividades de pesca en alta mar.

Para los fondos marinos situados fuera de la jurisdicción nacional, el enfoque basado en los ecosistemas significa que todas las actividades deben ajustarse a las mismas normas de protección y conservación ambiental, ya sea la explotación minera, la pesca de arrastre de fondo u otras actividades. Es conveniente recordar al respecto que las normas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos exigen la realización de una evaluación ambiental previa a la exploración de minerales.

Este año se plantea un nuevo desafío respecto de los recursos genéticos de los fondos marinos situados fuera de la jurisdicción nacional. Muchos representantes han sugerido que se aborde esta cuestión de conformidad con los principios del Convenio sobre la Diversidad biológica y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Unión Mundial para la Naturaleza considera que la cooperación internacional puede facilitar la conservación y el aprovechamiento sostenible de esos recursos y su utilización equitativa. También puede fortalecer las investigaciones científicas en colaboración y contribuir a la consolidación de conocimientos y de la capacidad para la conservación de la diversidad biológica. El nuevo Grupo de Trabajo puede contribuir a asegurar una preparación apropiada de los antecedentes fácticos como punto

de partida común para el examen de las opciones y los enfoques.

A fin de aplicar un enfoque basado en los ecosistemas, la Unión Mundial para la Naturaleza considera que las redes de zonas protegidas son un instrumento crucial, incluso en zonas situadas dentro y fuera de la jurisdicción nacional. Fuera de la jurisdicción nacional, tienen una función importante que desempeñar al preservar una diversidad biológica singular y representativa de los fondos marinos y de su potencial biotecnológico.

En dos observaciones finales, la Unión Mundial para la Naturaleza exhorta a que se dé a la Red para los Océanos y las Zonas Costeras (ONU-Océanos) una función definida en lo que respecta a la conservación de la diversidad biológica en zonas fuera de la jurisdicción nacional. La Unión podría respaldar al Grupo de Trabajo en la preparación de evaluaciones científicas sobre cuestiones de política. En el largo plazo, facilitaría el establecimiento de redes coherentes de zonas marinas protegidas.

Segundo, la Unión Mundial para la Naturaleza reitera su llamamiento a favor de una importante reformulación de arreglos nacionales, regionales y mundiales para el cumplimiento y la imposición de normas internacionales con miras a eliminar a todos aquellos que sacan provecho de actividades ilícitas en el mar. Se necesita cada vez con mayor urgencia un enfoque sistemático.

Una vez más, encomiamos la excelencia de los amplios informes del Secretario General sobre los océanos y la pesca.

**Sr. Talbot** (Guyana) (*habla en inglés*): Guyana asigna gran importancia al debate en curso sobre los océanos y el derecho del mar, el cual consideramos que está muy enriquecido por los informes del Secretario General sobre este tema. Nos complace participar en las deliberaciones de la presente sesión, que marca el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Quisiera manifestar ante todo que mi delegación apoya plenamente la declaración formulada por el Representante Permanente de Barbados en nombre de la Comunidad del Caribe (CARICOM). La declaración que formularé hoy apoya plenamente la opinión expresada en la declaración que formuló la CARICOM en

la 54ª sesión. de la Asamblea General, en el sentido de que:

“los beneficios que se han de derivar de las zonas a las cuales se aplica el principio de patrimonio común de la humanidad deben estar accesibles a toda la humanidad y no solamente limitados a los intereses comerciales que buscan explotar su rica biodiversidad con fines de lucro.” (A/59/PV.54)

El derecho es un instrumento de control social que, tanto sea en el ámbito interno como en el internacional, debe adaptarse a las exigencias del cambio que ocurre en la sociedad o en el sistema con el que se relaciona, si se quiere preservar su pertinencia y eficacia. El cambio es inminente en todas las formas de organización social humana; las normas jurídicas, lejos de ser inmutables y fijas, siempre están en un estado apropiado. El proceso de cambio se ejemplifica, por ejemplo, a través del ámbito actual de la jurisdicción nacional, que ha evolucionado por el interés cada vez mayor de la comunidad internacional en asuntos que hasta ahora habían correspondido a la jurisdicción nacional de un Estado. También podemos señalar que la situación jurídica de la propia plataforma continental ha surgido en respuesta a la evolución científica y de su aprovechamiento. La lista de ejemplos es interminable.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue calificada correctamente por el Sr. Hans Corell, ex Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, como quizá el único y más importante logro de codificación jurídica de la comunidad internacional en el siglo XX. Sin embargo es evidente que nunca se tuvo la intención de que la Convención fuera el cuerpo definitivo de disposiciones relativas al derecho del mar. No solamente se demuestra esta realidad en el propio documento —la definición real de lo que se quiso decir por “patrimonio común de la humanidad” no se estableció para siempre—, sino que tendría que interpretarse con flexibilidad porque las realidades conexas se pusieron de manifiesto o se dieron a conocer a la humanidad. Las disposiciones que están basadas en el estado del conocimiento humano en un determinado momento del tiempo inevitablemente deben ser cambiadas o reinterpretadas cuando las imperfecciones o defectos de ese estado del conocimiento pasan a ser evidentes. No deberíamos aplicar a esas imperfecciones soluciones oportunistas.

La asignación de recursos marinos en todo el mundo tiene antecedentes lamentablemente desiguales.

Hasta hace muy poco, el factor determinante en esas asignaciones ha sido la posesión de poder naval o de riqueza nacional. Cuanto más importante es el complemento en cada una de estas categorías mayor es el volumen de recursos marinos que le corresponde al Estado o la Potencia involucrada.

Quizá la principal repercusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue efectuar una distribución más equitativa de los recursos marinos en todo el mundo. La extensión del mar territorial, la creación de la zona económica exclusiva, la codificación declaratoria esencial de las normas que rigen la plataforma continental y el establecimiento del patrimonio común de la humanidad para abarcar el fondo marino y el subsuelo en zonas fuera de los límites de la jurisdicción nacional han eliminado ampliamente la manera en que anteriormente se asignaban recursos en asuntos marinos.

Además, es evidente que la comprensión que actualmente se tiene de los fondos marinos y sus recursos fuera de los límites de la jurisdicción nacional difiere radicalmente de la comprensión que se tenía al momento de celebrarse la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y es sensato inferir de esa realidad manifiesta que el ámbito y el alcance de la Convención con respecto a la definición de “patrimonio común de la humanidad” habrían sido más incluyentes si los negociadores originales hubiesen sabido lo que nosotros sabemos hoy.

A nuestro juicio, todo tiene que ver, con la posibilidad de aprovechamiento, con la evolución científica que amplía el acceso de la comunidad a recursos valiosos desconocidos anteriormente, pero que ahora se conocen o al menos se conocen parcialmente.

Guyana cree que la comunidad internacional no debe ser maniatada por una interpretación de un tratado que derive de una comprensión incompleta de la realidad. Más bien, estimamos que la comunidad debe proceder con un razonamiento analógico para adaptar, de ser necesario, los regímenes actuales a circunstancias e interpretaciones nuevas con objeto de proporcionar una comprensión más completa de la realidad; y consideramos que existen numerosos precedentes para proceder de esta manera en el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados contiene el concepto de cláusula *rebus sic stantibus* —según el cual, las disposiciones de un tratado pueden anularse si las presentes circunstancias son tales que si

se hubiesen conocido en el momento de las negociaciones originales, ese proyecto de tratado particular nunca se habría consumado.

Guyana de ninguna manera sugiere que el notable logro de la comunidad internacional, encarnado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se destruya o se menoscabe en modo alguno. En cambio, sugerimos que debemos hacer nuestras interpretaciones de “patrimonio común de la humanidad” de forma que nos permitan captar su significado actual íntegro —significado que ha sido transformado por una nueva realidad que, si hubiese sido conocida en el momento de las negociaciones iniciales que culminaron en la Convención, supuestamente habría generado un resultado más claro.

Es apropiado que recordemos que todo derecho está relacionado con la protección de intereses particulares, que cambia con el transcurso del tiempo en respuesta a cambios en la distribución del poder político en el seno de una entidad o sistema dado. Por consiguiente, de ello se deduce inevitablemente que cuanto mayor sea el número de intereses protegidos, mayor será la legitimidad de los mecanismos de protección que prevalezcan.

En este sentido, los mecanismos relativos al derecho del mar previos a la Convención perdieron gran parte de su legitimidad con la descolonización y la aparición de un gran número de nuevos Estados con nuevos intereses, que tuvieron que tenerse en cuenta en el régimen jurídico internacional. Es en parte debido a este fenómeno que se han introducido cambios importantes en el derecho internacional, inclusive cambios en el derecho del mar, que quedan reflejados en la Convención.

Guyana considera que, mientras elaboramos soluciones para nuevas situaciones no anticipadas con anterioridad, las omisiones involuntarias del consenso actual que constituye el derecho del mar no deben causar retrocesos como resultado de acciones que soslayan el espíritu subyacente y el propósito previsto de la Convención. Al respecto, es evidente que las convenciones relativas a la protección del medio ambiente son aleccionadoras y, en este sentido, me refiero en particular a las denominadas “convenciones marco”, en las cuales las lagunas actuales o las deficiencias del conocimiento humano se reconocen francamente, mientras que algunas disposiciones de dichas convenciones se incorporan a medida que se desarrolla el conocimiento perti-

nente a esas esferas. Proponemos que sería útil para el debate actual del derecho del mar que la comunidad internacional considerara a la Convención en sí misma, al menos parcialmente, como una “convención marco”, y que procedamos a resolver las lagunas y los problemas conexos más generales que puedan presentarse en el espíritu de equidad e imparcialidad que sustenta la Convención y del que nació el concepto de “patrimonio común de la humanidad”, en relación con el derecho del mar. Guyana considera que proceder de otro modo sería dar un paso hacia atrás, pues ello restablecería la estratificación en la asignación de los recursos marinos que pensábamos que ya había sido rechazada.

La magnitud del poder y los recursos de un Estado no deben determinar por sí solos el conjunto de recursos marinos asignados a ese Estado. Por el contrario, Guyana considera que la única manera justa de proceder es la asignación equitativa de recursos marinos.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): De conformidad con la resolución 51/6 de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1996, tiene la palabra el Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Excmo. Sr. Satya Nandan.

**Sr. Nandan** (Autoridad Internacional de los Fondos Marino) (*habla en inglés*): El décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es un buen momento para evaluar las contribuciones a la paz y al orden en los océanos. Lamentablemente, en el breve tiempo que dispongo para dirigirme a la Asamblea, es difícil hacer tal evaluación en forma detallada.

En general, sería justo decir que la Convención ha sido un éxito notable. Las Naciones Unidas pueden sentirse justamente orgullosas de este logro. A causa del éxito extraordinario de la Convención por lo general se da por sentado el derecho del mar y se repara poco en su carácter complejo y multifacético y en la manera en que ha equilibrado y conjugado cuidadosamente usos y reclamaciones contrapuestos. Tampoco se aprecia debidamente el hecho de que la Convención sigue aportando una contribución inmensa a la paz y a la seguridad mundiales.

Los logros de la Convención son numerosos. La Convención ha proporcionado estabilidad y certeza al derecho internacional de mar. Al definir los derechos y obligaciones de los Estados, ha sentado las bases para el mantenimiento de relaciones entre los Estados

respecto de cuestiones marítimas. Ha ofrecido un marco jurídico firme para que los Estados realicen actividades en los océanos. El amplio informe del Secretario General, tan bien preparado por la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, no sólo demuestra la diversidad de las cuestiones relacionadas con los océanos, sino que también ilustra claramente que los Estados, las organizaciones internacionales y los órganos judiciales consideran generalmente que la Convención es la fuente primordial del derecho internacional del mar. Esto queda demostrado además por la coherencia con que se aplica la Convención en la práctica de los Estados.

No obstante, la comunidad internacional no ha tenido éxito en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por los Estados en virtud de la Convención. Como lo demuestran los dos proyectos de resolución que tiene ante sí la Asamblea, la comunidad internacional no puede estar convencida de que ha logrado resultados positivos en sus actividades de administración de los océanos. Los Estados necesitan elaborar estrategias de gestión que equilibren las prácticas ecológicas racionales con las necesidades económicas y deben adoptar un enfoque de ecosistema a fin de asegurar el aprovechamiento sostenible a largo plazo de los océanos y sus recursos. Para lograr este objetivo es necesario desarrollar la capacidad haciendo gran hincapié en la promoción de los conocimientos científicos y ecológicos. Mediante el conocimiento, los encargados de adoptar decisiones estarán más informados y se promoverá una ordenación ética de los mares y los océanos.

Este año es también el décimo aniversario de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que fue creada cuando entró en vigor la Convención. La Autoridad celebró este acontecimiento en mayo de este año, durante su período ordinario de sesiones, y consagró un período de sesiones conmemorativo de dos días en el que intervinieron el Presidente de la Asamblea, el Secretario General de la Autoridad, el Primer Ministro de Jamaica, el Secretario General de las Naciones Unidas por conducto del entonces Asesor Jurídico interino, el Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y el Presidente de la Comisión Preparatoria. También se recibieron mensajes del Presidente de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del primer Presidente de la Comisión Preparatoria, y los presidentes de grupos regionales formularon declaraciones. Dos grupos celebraron

debates sobre las consecuciones de la Autoridad en sus primeros diez años y sobre su futura dirección. Posteriormente se hicieron presentaciones científicas sobre los diversos recursos minerales de los fondos marinos y sobre el medio ambiente marino en el que esos recursos se encontraron. El informe anual del Secretario General de la Autoridad (ISBA/10/A/3) correspondiente a este año contiene un examen de la labor de la Autoridad y su desarrollo en los últimos diez años. Recomendando el informe a aquellos que desean saber más sobre el funcionamiento de la Autoridad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los Estados miembros de la Autoridad que durante diez años han apoyado y guiado su desarrollo. También deseo expresar mi agradecimiento por las numerosas observaciones alentadoras que han formulado las delegaciones en esta Asamblea sobre la labor de la Autoridad. Creo que esta es una indicación positiva de compromiso de los Estados miembros para con el cumplimiento por la Autoridad de sus responsabilidades con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y al Acuerdo relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención. Además deseo manifestar mi gratitud por las amables observaciones formuladas por las delegaciones sobre mi reelección como Secretario General de la Autoridad de los Fondos Marinos.

El año anterior, informé a la Asamblea de que la Autoridad estaba a punto de aprobar un programa de trabajo trienal. Esto se hizo en el 10º período de sesiones. El programa sustantivo de trabajo de la Autoridad se basa en las disposiciones de la Convención y en el Acuerdo, en particular, el párrafo 5 de la sección I, del anexo del Acuerdo. La labor de la Autoridad se ha vuelto progresivamente más científica y técnica. Se basa en gran medida en la investigación científica marina en los fondos oceánicos profundos y en la necesidad de llegar a una mejor comprensión del entorno de los fondos oceánicos. De hecho, una de las responsabilidades fundamentales de la Autoridad con arreglo a la Convención es promover y fomentar la investigación científica marina en los fondos marinos y divulgar los resultados de dicha investigación. La Autoridad tiene además el mandato de garantizar la protección efectiva del medio ambiente marino de los efectos dañinos que puedan resultar de actividades en los fondos marinos. La Autoridad ha procurado cumplir con su mandato de dos maneras.



En primer lugar, realizando talleres técnicos que congreguen a renombrados científicos, expertos, investigadores, contratistas de exploración, representantes de la industria minera costa afuera y representantes de los Estados Miembros. El taller más reciente, celebrado en septiembre de este año, aprobó recomendaciones sobre el establecimiento de líneas de base ambientales y programas de verificación en relación con sitios mineros de sulfuros polimetálicos y costras ricas en cobalto. Las recomendaciones de este taller se presentarán para su consideración y aprobación a la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad.

En segundo lugar, la Autoridad promueve la investigación científica marina mediante distintos programas de investigación científica que realizan científicos internacionales. Actualmente la Autoridad está vinculada con lo que se denomina el proyecto Kaplan, concebido para medir la biodiversidad, la gama de especies y la corriente genética en la Zona Clarion-Clipperton, en el Pacífico nororiental. Ésta es la región para la cual la Autoridad ya ha otorgado seis contratos de exploración. La información conseguida con este proyecto se utilizará para determinar los posibles riesgos para la vida marítima resultantes de la extracción minera de nódulos de manganeso.

El primer grupo de resultados y análisis detallados del proyecto estará pronto disponible, antes del verano de 2005. Entre los resultados se incluyen una base de datos sobre las especies más importantes encontradas en la Zona Clarion-Clipperton, incluidas sus secuencias genéticas. De hecho, será el primer proyecto de su género en evaluar recursos genéticos en el ámbito de los nódulos. La información sobre la biodiversidad que surja de este proyecto se superpondrá al modelo geológico que está elaborando la Autoridad para esa zona. El modelo mejorará de manera considerable nuestro conocimiento del entorno geológico y biológico de esa zona.

La Autoridad también promoverá dos programas en el marco del Censo de la Fauna y la Flora Marinas que atañen directamente a su labor. Se trata de la labor emprendida por el Grupo de ecosistemas de quimiosíntesis y el Grupo de montes submarinos. Ambos grupos abarcan los entornos en que se encuentran sulfuros polimetálicos y costras ricas en cobalto. Actualmente el Consejo de la Autoridad está examinando la reglamentación para la exploración de estos recursos.

Los sulfuros polimetálicos se encuentran en respiraderos hidrotermales, que son zonas del fondo marino en los que brota del fondo marino agua sumamente caliente y rica en minerales, que produce chimeneas minerales que albergan una vasta diversidad de especies. Por otra parte, las costras ricas en cobalto se encuentran normalmente en los montes marinos, que a menudo albergan fauna propia de ellos, es decir, fauna que no se encuentra en ninguna otra parte. La vulnerabilidad de las comunidades de los montes marinos y la preocupación por su protección han sido subrayadas claramente en años recientes en debates relativos a los métodos de pesca destructivos utilizados en los montes marinos. Esta cuestión fue objeto de un debate en el Proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas, y también se alude a ella en los dos proyectos de resolución que tiene ante sí la Asamblea. Para la Autoridad, es importante entender la ecología de los montes marinos y el carácter de la flora y fauna existentes allí, y determinar las medidas que hay que adoptar para reducir lo máximo posible cualquier efecto dañino causado por las actividades relacionadas con la minería.

Es motivo de grave preocupación que, mientras la Autoridad está en proceso de elaborar directrices para la aplicación de medidas preventivas para la protección del ecosistema en los montes marinos sobre una base científica, hay actividades pesqueras que, con el uso de cierto tipo de aparejos, están destruyendo indiscriminadamente ese preciso ecosistema.

La investigación científica marina es un instrumento esencial para la gobernanza de los océanos. Aumenta el conocimiento del entorno marino y nos permite adoptar decisiones adecuadas en relación con sus recursos. Para la Autoridad, este conocimiento es importante para garantizar que los reglamentos y las directrices que adopte tengan una base científica sólida. A pesar del progreso realizado en la investigación científica marina en años recientes, el hecho es que nuestro conocimiento de los océanos sigue siendo insignificante. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el océano del que depende la vida en la Tierra.

La preocupación por la falta de información científica en la elaboración de una política eficaz sobre los océanos se expresó recientemente en la declaración introductoria del Presidente de la Comisión de los Estados Unidos sobre Política Oceánica cuando presentó al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del

Senado de los Estados Unidos el informe final de la Comisión, titulado *Plan oceánico para el siglo XXI*. Afirmó allí que

“Una política nacional oceánica eficaz debe basarse en una información científica imparcial, fiable y actualizada. Lamentablemente, los océanos siguen siendo uno de los entornos menos explorados y menos entendidos del planeta, a pesar de algunos descubrimientos muy alentadores del siglo pasado.”

La necesidad de conocer mejor el entorno oceánico es obvia. Basta con leer los proyectos de resolución que tiene ante sí la Asamblea para reconocer que varias de las medidas que se pide adoptar a los Estados sólo se pueden aplicar efectivamente si los Estados tienen un conocimiento científico adecuado del entorno marino. Por este motivo, el año pasado en mi intervención insté a la Asamblea General a adoptar una declaración en apoyo a la intensificación de los esfuerzos en investigación científica marina mediante programas nacionales, regionales y mundiales para generar un nuevo impulso en la investigación científica marina. Esa declaración no tendrá repercusiones financieras para las Naciones Unidas. Al contrario, servirá para alentar a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones de beneficencia y las instituciones científicas a dar prioridad a la investigación científica marina, de la que todos podemos beneficiarnos.

Los dos proyectos de resolución bastante completos que tiene ante sí la Asamblea, que figuran en los documentos A/59/L.22 y A/59/L.23, se refieren a temas variados y es difícil abarcarlos todos. Quisiera felicitar a los coordinadores de los proyectos de resolución y a los que les ayudaron por haber resaltado las numerosas cuestiones importantes relativas a la gobernanza de los océanos. Deseo expresar mi agradecimiento por las referencias a la Autoridad y a su labor, así como a la necesidad de que los Estados Miembros realicen contribuciones oportunas. Quisiera informar a la Asamblea de que el 11º período ordinario de sesiones de la Autoridad se celebrará del 15 al 26 de agosto de 2005. Estará precedido de una reunión de una semana de la Comisión Jurídica y Técnica. Cabe mencionar que hay buenas perspectivas de que la Autoridad reciba una nueva solicitud para una licencia de exploración de nódulos antes del próximo período de sesiones.

Quisiera renovar la solicitud a los Estados Miembros de que contribuyan al fondo voluntario de la Autoridad a fin de facilitar que los países en desarrollo miembros de la Comisión Jurídica y Técnica y del Comité de Finanzas puedan participar en la labor de esos órganos.

Puesto que tuve el honor de actuar como Presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorias y fui artífice del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces, que fue aprobado en 1995, no puedo dejar de formular algunas observaciones con respecto al proyecto de resolución que figura en el documento A/59/L.23 relativo a la pesca sostenible. En primer lugar, quisiera expresar mi satisfacción por la entrada en vigor del Acuerdo sobre poblaciones de peces y la aprobación de sus disposiciones en varias organizaciones de pescas regionales, en particular a través de la nueva Convención sobre poblaciones de peces del Océano Pacífico occidental y central, que entró en vigor en junio de 2004, y la Convención sobre la conservación y ordenación de los recursos pesqueros en el Océano Atlántico sudoriental, que entró en vigor en 2003.

Como se indica en el proyecto de resolución, con arreglo a los términos del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces, se prevé para 2006 una conferencia de revisión. A la luz de una serie de cuestiones planteadas en el proyecto de resolución con respecto a la pesca en alta mar, la conferencia de revisión podría ser un foro adecuado para examinar varias de estas cuestiones. Quizá convenga comenzar a considerar cómo se las puede abordar.

Tal vez la primera observación que hay que hacer es que el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces es un instrumento robusto y de largo alcance. Quizá no sea perfecto, pero es hasta la fecha el acuerdo más completo en relación con la conservación y la ordenación de poblaciones de peces.

No obstante, hay que reconocer que hasta que el Acuerdo goce de participación universal y los Estados acaten plenamente sus obligaciones, en particular las que figuran en el artículo 8 del Acuerdo en relación con la función de las organizaciones regionales de pesca, la pesca en alta mar no reglamentada, es decir, la pesca realizada por no miembros al margen de las normas establecidas por las organizaciones regionales de ordenación de la pesca, seguirá siendo un problema

considerable. El Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de pesca es sin lugar a dudas una medida formidable en favor del uso sostenible de los recursos pesqueros, pero no podrá lograr su pleno potencial a menos que se adhieran a él los más importantes Estados ribereños, pesqueros y del pabellón.

Una estrategia fundamental debe ser asegurar una participación amplia en el Acuerdo. La necesidad de ello se ha recalcado reiteradamente en numerosas resoluciones de la Asamblea General y en otros organismos internacionales. A largo plazo, es importante que todos los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se adhieran al Acuerdo, a fin de que, como se previó originalmente, haya una conexión perfecta entre las disposiciones de la Convención y las del Acuerdo. Es probable que esto tome algún tiempo, pero, en el corto plazo, es especialmente importante que todas las naciones que pescan en alta mar y todos los Estados del pabellón efectivos y potenciales se hagan Partes en el Acuerdo tan pronto como sea posible, a fin de que puedan reducirse al mínimo las oportunidades de los “beneficiarios parásitos” y de que tantos participantes en las actividades de alta mar como sea posible estén vinculados por las red de obligaciones jurídicas existentes.

Se deberían hacer esfuerzos adicionales para que países concretos se adhieran al Acuerdo sobre poblaciones de peces. Entre ellos podrían incluirse a los que ya son miembros de dos o más arreglos regionales y que, por lo tanto, tienen un interés claro en la pesca, pero que aún no son Partes en el Acuerdo, y a los países que son Estados del pabellón importantes de buques de pesca en alta mar. Es interesante observar que de los 14 países de registro abierto que tenían registrado el mayor número de buques pesqueros entre 1999 y 2003, 10 no eran Partes en el Acuerdo y tres de ellos ni siquiera eran Partes en la Convención de 1982. En otras palabras, voluntariamente enarbolan pabellones de buques pesqueros pero no están dispuestos a comprometerse a cumplir con las obligaciones básicas de los Estados del pabellón consagradas en la Convención y aceptadas por la mayoría de la comunidad internacional, pues 145 Estados Miembros de las Naciones Unidas son Partes en la Convención. Sin embargo, todos esos países están presentes en la Asamblea General y es probable que participen en la aprobación de los actuales proyectos de resolución.

La segunda observación esencial que hay que formular es que la experiencia ha mostrado que el

Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces tal vez no haya ido lo suficientemente lejos. Hay lagunas serias en cuanto a su cobertura que deben abordarse. Por ejemplo, se considera que su aplicación está limitada a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias. Algunos estiman que no cubre de manera suficiente el problema de las poblaciones discretas de alta mar, entre ellas la pesca en los fondos marinos. Aunque esa dificultad pueda ser más una percepción que una realidad, lleva a la situación indeseable en la que, para resolver problemas concretos, se hacen propuestas fragmentarias y a veces bastante radicales, como por ejemplo, propuestas para prohibir de manera general ciertas prácticas pesqueras. No cabe duda de que sería mejor que esos problemas se trataran con arreglo a los mismos principios que se aplican a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y de conformidad con el mismo tipo de marco general de ordenación que fomenta el Acuerdo. La pesca en alta mar es un fenómeno mundial y en lugar de colmar lagunas de manera fragmentaria se debe contar con un marco general mundial de ordenación. Por consiguiente, se debe considerar seriamente la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo de manera tal que incluya a todas las poblaciones de peces de alta mar.

La tercera cuestión de importancia con respecto al Acuerdo sobre poblaciones de peces es que, si bien confiere una función esencial a las organizaciones regionales de ordenación de la pesca, cuyo propósito es que se llegue en última instancia a una situación en que la pesca de alta mar sólo la puedan realizar los buques que enarbolan el pabellón de los Estados que son miembros de esas organizaciones o que cooperen con ellas, lamentablemente lo que hemos observado es que esto no basta por sí solo. La cobertura de las organizaciones regionales de ordenación de la pesca es incompleta; algunas carecen de capacidad, y en todas ellas la participación no es lo suficientemente amplia para asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación y para eliminar el problema de los beneficiarios parásitos. La conclusión inevitable es que para aplicar el Acuerdo no basta con contar con una red dispar y relativamente ineficaz e incompleta de organizaciones regionales de la pesca. Es probable que con una mayor supervisión a nivel mundial se pueda reforzar significativamente las medidas nacionales y regionales para aplicar efectivamente el Acuerdo. Con ello se fomentaría un enfoque más sistemático al mejoramiento

del respeto de las medidas de conservación y ordenación del Acuerdo. El mandato de esas organizaciones debe ampliarse para que cubra todas las poblaciones de peces en la zona de su competencia, incluso las que se encuentran en los montes marinos.

El cuarto problema principal es que ni el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces ni ninguna de las organizaciones regionales de ordenación de la pesca están equipados para atender al problema de la asignación de los recursos de alta mar. La alta mar es una de las pocas zonas que quedan de patrimonio común mundial, junto con la atmósfera y la biosfera. Pese a las crecientes restricciones que se han impuesto al ejercicio de las libertades en alta mar, mediante la amplitud y magnitud de las obligaciones impuestas a los Estados por el Acuerdo, el actual régimen internacional que rige el acceso a los recursos de alta mar sigue siendo la norma de captura tradicional. Si se lo deja sin restricciones, sabemos que el resultado final del ejercicio ilimitado de los Estados del derecho de pesca en alta mar es la tragedia del patrimonio común.

Se han emprendido varias iniciativas internacionales para examinar con mayor detalle estos problemas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por ejemplo, sigue proporcionando asesoramiento y apoyo técnico valioso a las organizaciones regionales de pesca, y celebrará un período de sesiones ministerial de su Comité de Pesca en 2005. Asimismo, se espera que el Comité de Pesca de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos proporcione en breve un documento de trabajo importante sobre los incentivos económicos de la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada, para el cual se basó en un análisis exhaustivo. Podemos también esperar con interés los resultados de la reciente iniciativa emprendida por varios ministros de pesca de países desarrollados y en desarrollo encaminada a establecer un grupo de tareas ministerial sobre la pesca en alta mar a fin de procurar identificar medidas prácticas que tengan un efecto mensurable sobre el problema de la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada. Si los Estados y entidades pesqueros aplican, en su conjunto, los resultados de estos procesos, ello ayudará a ver el camino que ha de seguirse.

Quisiera concluir manifestando una vez más que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus instrumentos conexos proporcionan una base jurídica sólida para la gobernanza de los océanos, pero que, evidentemente, es mucho lo que debe aún ha-

cer la comunidad internacional, de manera individual y colectiva, para cumplir con las exigencias de una gestión responsable de los océanos y sus recursos.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): De conformidad con la resolución 51/204 de la Asamblea General de 17 de diciembre de 1996, tiene la palabra el Sr. Dolliver Nelson, Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

**Sr. Nelson** (Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar) (*habla en inglés*): Es un honor para mí, en nombre del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, hacer uso de la palabra en este quincuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General con ocasión de su examen del tema “Los océanos y el derecho del mar”, y especialmente con ocasión del décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Expreso al Presidente de la Asamblea General mis felicitaciones personales y las del Tribunal por su elección a este cargo.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para informar a la Asamblea General sobre las novedades que se han presentado en el Tribunal desde la última sesión de la Asamblea sobre este tema del programa, celebrada en noviembre de 2003. Me complace en particular informar a la Asamblea de que las negociaciones con las autoridades alemanas sobre el Acuerdo de Sede entre el Tribunal y la República Federal de Alemania concluyeron satisfactoriamente. El texto del Acuerdo deberá firmarse antes del término de este año. Deseo dejar constancia de nuestro profundo reconocimiento a la República Federal de Alemania por la excelente cooperación que ha brindado al Tribunal en este sentido.

A lo largo de este año, el Tribunal celebró dos períodos de sesiones: el 17°, del 22 de marzo al 2 de abril de 2003 y el 18°, del 20 de septiembre al 1° de octubre de 2003. Estos períodos de sesiones se dedicaron a cuestiones de carácter jurídico así como administrativos y de organización relacionados con el cumplimiento de las funciones jurídicas del Tribunal.

Por lo que respecta a la labor jurídica del Tribunal, quisiera señalar que aún hay un caso pendiente, a saber, la *Causa relativa a la conservación y explotación sostenible de las poblaciones de pez espada en el Océano Pacífico sudoriental (Chile/Comunidad Europea)* que se presentó ante una Sala del Tribunal. Por una orden de fecha 16 de diciembre de 2003, la fecha límite para presentar objeciones preliminares a este

caso, fue prorrogada a solicitud de las partes hasta el 1º de enero de 2006 a fin de permitirles llegar a un acuerdo.

Desde que presentara mi último informe ante la Asamblea General no se han presentado al Tribunal nuevos casos. Sin embargo, debo señalar que en repetidas ocasiones se han presentado solicitudes a la Secretaría para obtener información respecto a la institución del procedimiento de pronta solución y, en más de un caso, no se instituyeron las causas porque las negociaciones entre las partes acabaron con éxito.

Ciertamente, el Tribunal tiene la función de garantizar que las partes tengan fácil acceso al mismo, factor que puede facilitar el proceso de negociación entre las partes en una controversia. Por ello, la mera existencia del Tribunal, un órgano permanente, ayuda a los Estados a resolver sus controversias sobre temas marítimos sin recurrir al litigio. El Tribunal ha resuelto 12 casos en sus ocho años de existencia, en los que ha emitido seis fallos y 26 órdenes, lo que constituye un historial muy positivo en comparación con los de otras cortes y tribunales internacionales en las etapas iniciales de su existencia.

Es satisfactorio comprobar que 17 Estados partes de distintas regiones del mundo han participado en procesos ante el Tribunal. También cabe señalar —y esto es algo en lo que hay consenso general—, que el Tribunal ha dictado sus decisiones dentro de períodos notablemente cortos. El Tribunal ya ha hecho algunas contribuciones al desarrollo del derecho internacional en lo tocante a cuestiones como la nacionalidad de las reclamaciones, la reparaciones, el uso de la fuerza y en actividades para hacer cumplir la ley, la persecución y el tema de la relación genuina entre el Estado del pabellón y el buque.

También puede afirmarse justamente que el Tribunal ha desarrollado una jurisprudencia coherente en cuanto a la utilización de procedimientos de solución rápida en virtud del artículo 292 de la Convención. Los casos relacionados con la adopción de medidas provisionales, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 290, tenían que ver principalmente con la protección del entorno marino. En esos casos, el Tribunal hizo hincapié en el deber de cooperar, e insistió en la importancia de actuar con prudencia y cautela al realizar actividades que pudieran tener consecuencias perjudiciales para el medio marino.

En cierto sentido, estas decisiones puede considerarse que ayudan al desarrollo del derecho internacional medioambiental. Al respecto, deseo agradecer a los patrocinadores del proyecto de resolución A/59/L.22 que hayan tomado nota de la importante y continua contribución del Tribunal a la solución pacífica de controversias, de conformidad con la Parte XV de la Convención y que hayan destacado el importante papel y autoridad del Tribunal respecto a la aplicación de la Convención y el acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención.

Quisiera recordar también que de los 145 Estados partes en la Convención, tan solo 34 han formulado declaraciones por escrito relativas a la solución de controversias en virtud del artículo 287 de la Convención y que 21 Estados partes han optado por el Tribunal como el medio o como uno de los medios para la solución de las controversias en lo que atañe a la interpretación o la aplicación de la Convención. Cabe esperar que un número cada vez mayor de Estados aproveche la posibilidad que se le ofrece en el artículo 287 de la Convención de decidir la manera de resolver las controversias existentes respecto de la Convención, tal y como figura en el proyecto de resolución A/59/L.23. Los Estados también pueden reconocer la jurisdicción del Tribunal a través de acuerdos internacionales. Ya se han concertado siete de estos acuerdos multilaterales.

Debe señalarse que, incluso a falta de toda declaración con arreglo al artículo 287 de la Convención, los Estados tienen la obligación de someter sus controversias a un procedimiento que entrañe decisiones vinculantes. En virtud de esta disposición, se considera que los Estados que no hayan formulado ninguna declaración han aceptado el arbitraje, por lo que el arbitraje será el único procedimiento vinculante para las partes, a menos que se disponga lo contrario.

Al respecto, quisiera señalar a la atención la posibilidad de que las partes presenten sus diferencias ante una sala especial del Tribunal, con arreglo al artículo 15 del párrafo 2 del Estatuto del Tribunal. Esta sala especial es una alternativa al arbitraje y debe suscitar especial interés para sus posibles usuarios por diversos motivos: la composición de una sala especial quedará determinada por el Tribunal con la aprobación de las partes, lo que le da a las partes cierta medida de control sobre su composición. Las partes en una controversia no tienen que asumir los costes del proceso ante el Tribunal, por ejemplo, no incurrirá en gastos de remuneración de los miembros de la sala, ni de viaje

y no habrá gastos administrativos ni de interpretación. Las partes disponen del reglamento del Tribunal que puede ser aplicado con flexibilidad. Por ejemplo, las partes pueden proponer ciertas modificaciones o adiciones al reglamento; pueden convenir los plazos para la presentación de reclamaciones y el número de reclamaciones y la celebración de procesos verbales. No obstante, debe señalarse que la institución de procedimientos jurídicos internacionales conlleva gastos para los Estados interesados. Es cierto que, a diferencia de lo que ya se ha mencionado con respecto a los procesos de arbitraje, las partes en un litigio no deben compartir la carga financiera vinculada al funcionamiento del Tribunal, ya que los gastos en que incurre el Tribunal al tratar casos que se le remiten, quedan financiados por los Estados partes.

Sin embargo, las partes deben cubrir los gastos de asesores y abogados que les representen, así como del alojamiento en Hamburgo. Estos costos pueden ser onerosos, en especial para Estados en desarrollo, cuando éstos contemplan la presentación de un caso ante el Tribunal. Al respecto, deseo señalar a la atención, la resolución 55/7 titulada “Los océanos y el derecho del mar”, aprobada el 30 de octubre de 2000, en virtud de la cual, la Asamblea General solicitó al Secretario General establecer un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para ayudar a los Estados en desarrollo en la solución de controversias por intermedio del Tribunal. Hasta la fecha, dos Estados han contribuido al fondo. El fondo cuenta con 55.000 dólares en la actualidad. Cabe esperar que la mayoría de los Estados consideren hacer contribuciones a este fondo.

Me complace informar de que el 1º de septiembre de 2004, el Sr. Horst Köhler, Presidente de la República Federal de Alemania, acompañado por 140 miembros del cuerpo diplomático fue recibido por el Tribunal. En esa ocasión formulé una declaración sobre la labor del Tribunal que puede encontrarse en la página Web del Tribunal ([www.itlos.org](http://www.itlos.org)).

También me complace informar a la Asamblea General de que, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los días 25 y 26 de septiembre de 2004 en las instalaciones del Tribunal se celebró un simposio sobre delimitación marina. El evento fue organizado conjuntamente por la Fundación Internacional para el Derecho del Mar, la Association internationale du droit de la mer, el Instituto de Derecho Económico del Mar de

Mónaco, el Instituto de Derecho del Mar y Derecho Marítimo de la Universidad de Hamburgo, el Organismo Federal Marítimo e Hidrográfico y la Universidad de Derecho Bucerius de Hamburgo. Más de 150 participantes, entre ellos un gran número de representantes de Estados, asistieron a este evento. El simposio demostró la importancia de las cuestiones de la delimitación marítima. Está claro que estas cuestiones siguen interesando a los profesionales, expertos y representantes gubernamentales. Por lo que respecta al Tribunal, el mismo está dispuesto a abordar los casos relativos a la delimitación marítima y para ello cuenta con la pericia necesaria.

También quisiera mencionar que el Tribunal ha adoptado nuevas medidas encaminadas a desarrollar su relación con otras organizaciones y órganos internacionales. Durante el año transcurrido, el Tribunal ha concertado acuerdos administrativos con la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana.

Desde que hablé ante la Asamblea en noviembre del año pasado, un Estado se ha adherido al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal. El Acuerdo entró en vigor el 30 de diciembre de 2001, y hasta la fecha, únicamente 14 Estados han manifestado su voluntad de suscribirlo. En este sentido, quisiera mencionar la resolución 58/204 de la Asamblea General de 23 de diciembre de 2003, en la cual la Asamblea instaba a los Estados que aún no lo habían hecho a que consideraran ratificar o adherirse al Acuerdo. La Secretaría envió notas verbales a los Estados partes en junio de 2004, en las que hacía referencia a la recomendación de la Asamblea General. Esta recomendación también se ha recogido en el proyecto de resolución de este año.

Hasta el 1º de noviembre de 2004, en el presupuesto general del Tribunal había un saldo en cuotas sin pagar que ascendía a 2.569.684 dólares correspondientes a los años 1996-1997 hasta 2004. El Tribunal es consciente de las dificultades que esta situación puede ocasionar con respecto a su funcionamiento. En diciembre de este año la Secretaría enviará notas verbales a los Estados partes interesados recordándoles las cuotas aún pendientes de pago al presupuesto del Tribunal. Agradecemos a los patrocinadores el llamamiento hecho en el proyecto de resolución a los Estados partes en este sentido.

Quisiera hacer referencia al programa de pasantías del Tribunal y a la beca ofrecida por el Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) para financiar la participación en el programa de candidatos procedentes de países en desarrollo. Me complace informar a la Asamblea de que, desde que se creó, a principios de este año, 11 pasantes de 11 países ya han podido beneficiarse de esta beca. En nombre del Tribunal, deseo manifestar nuestro agradecimiento al Organismo de Cooperación Internacional de Corea por su generosa contribución.

Aprovecho la oportunidad para manifestar que el Tribunal sigue buscando el apoyo moral y material de la comunidad internacional. Para concluir, deseo manifestar mi reconocimiento al Presidente de la Asamblea y a las delegaciones por haberme brindado la oportunidad de intervenir en esta reunión. También quisiera agradecer al Secretario General, al Asesor Jurídico y al Director de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar el apoyo que nos han brindado. Deseo el mejor de los éxitos a la Asamblea General en sus importantes deliberaciones durante el actual período de sesiones.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Hemos escuchado al último orador del debate sobre el tema 49 del programa y sus subtemas a) y b).

Pasaremos ahora a examinar los proyectos de resolución A/59/L.22 y A/59/L.23 en su forma revisada oralmente.

Antes de dar la palabra a los representantes que deseen intervenir para explicar su voto o su posición antes de pasar a tomar una decisión sobre los proyectos de resolución me permito recordar a las delegaciones que las explicaciones de voto deben limitarse a 10 minutos y que los representantes deben hacerlas desde sus asientos.

**Sr. Erciyes** (Turquía) (*habla en inglés*): En cuanto a los dos proyectos de resolución que tenemos a nuestra consideración, bajo el tema 49 del programa, Turquía votará en contra del proyecto de resolución que figura en el documento A/59/L.22, titulado “Los océanos y el derecho del mar”. Mi delegación votará en contra del proyecto de resolución porque algunos de los elementos que figuran en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —que le impidieron a Turquía aprobar la Convención— figuran una vez más en el proyecto de resolución de este año. Turquía apoya los esfuerzos internacionales por establecer

un régimen del mar basado en el principio de la equidad y que pueda ser aceptable para todos los Estados. Sin embargo, a nuestro juicio, en la Convención no se contemplan debidamente las situaciones geográficas especiales, y, por ello, no puede establecer un equilibrio aceptable entre los intereses en conflicto. Además, en la Convención no se contempla el registro de reservas sobre cláusulas específicas.

A pesar de que Turquía está de acuerdo con la Convención por lo que respecta a su intención general y con la mayoría de las disposiciones que incluye, no podemos pasar a formar parte de ella debido a sus considerables deficiencias. Por lo tanto, Turquía no puede apoyar el proyecto de resolución en el que también se insta a los Estados a ser partes en la Convención y a armonizar sus legislaciones nacionales con las disposiciones de la Convención.

En cuanto al proyecto de resolución sobre la pesca sostenible, que figura en el documento A/59/L.23 en su forma revisada oralmente, mi delegación desea declarar que Turquía está plenamente comprometida con la conservación, gestión y uso sostenible de los recursos marinos vivos y que le atribuye gran importancia a la cooperación regional para ese fin. En este sentido, Turquía apoya el proyecto de resolución, pero mi delegación quiere afirmar una vez más nuestra postura con respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por los motivos que acabo de indicar, Turquía no puede dar su aprobación a ciertas referencias que figuran en el proyecto de resolución con respecto a la Convención, en especial la referencia que se hace en el párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se hace un llamamiento a los Estados para que se hagan partes en la Convención. En este sentido, Turquía se desvincula del consenso alcanzado en torno a esas referencias en particular.

**Sra. Núñez de Odremán** (República Bolivariana de Venezuela): Mi delegación desea hacer referencia expresa al proyecto de resolución presentado en este Salón con la signatura A/59/L.22, relativo al subtema a) del tema 49, titulado “Los océanos y el derecho del mar”, el cual se encuentra en consideración en el proceso de votación a realizarse seguidamente.

Al respecto, la delegación de Venezuela desea resaltar una vez más, su compromiso de cooperar con los esfuerzos destinados a promover la coordinación sobre las cuestiones relativas al tema de los océanos en el marco de las negociaciones culminadas recientemente

y cuyo resultado arrojó el texto que se presentará en pocos momentos en este Salón.

En tal sentido, expresamos que las razones que han impedido que Venezuela sea parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aún persisten en el tiempo. Por tal motivo, mi delegación no se encuentra en la posición de compartir con los Estados que apoyan el referido proyecto de resolución, por cuanto la República Bolivariana de Venezuela no es parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, ni tampoco le son aplicables las normas de dicha Convención, a título de derecho consuetudinario internacional, salvo aquellas que la República Bolivariana de Venezuela hubiera reconocido o reconociera en el futuro expresamente, mediante la incorporación de éstas a su legislación interna.

Una vez dicho lo anterior, mi delegación desea ratificar su posición histórica con relación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al considerar que algunos aspectos contenidos en el documento presentado por la presidencia en el día de hoy inducen a mi delegación a abstenerse en la votación que se desarrollará a continuación.

Mi delegación desea también hacer referencia al proyecto de resolución presentado en este Salón con la signatura A/59/L.23, relativo al subtema b) del tema 49 "La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexos", el cual se encuentra en consideración en este Salón.

Al respecto, la delegación de Venezuela desea resaltar su compromiso de cooperar con los esfuerzos destinados a promover la coordinación sobre las cuestiones relativas al tema de la pesca sostenible, en el marco de las negociaciones culminadas recientemente y cuyo resultado arrojó el texto presentado en este Salón.

Es importante señalar que, a nivel nacional, Venezuela desarrolla decididos avances en materia de conservación y ordenación de los recursos hidrobiológicos y las medidas para el control de las operaciones de los buques que enarbolan el pabellón nacional. A su vez, mi país ha realizado acciones de cooperación en el

marco de organizaciones de manejo pesquero regional, relativas a las medidas efectivas de conservación para mantener la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios. Los resultados de la cooperación conjunta lograda a través de esos foros se han traducido hasta el momento en la adopción de resoluciones y recomendaciones regulatorias dirigidas a esas poblaciones.

En ese contexto, Venezuela ha participado, entre otros, en las comisiones internacionales de ordenación pesquera, como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y la Comisión Interamericana del Atún Tropical, así como en la negociación de la Convención interamericana para la protección y la conservación de las tortugas marinas, de la cual es depositaria.

Igualmente, nuestro país participó desde el inicio en las negociaciones del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe y su Protocolo sobre fauna, flora y zonas especialmente protegidas, así como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que consideramos como el instrumento marco para regular la conservación y utilización de la diversidad biológica en todos sus ámbitos.

Venezuela ha brindado apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo en el marco de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-occidental, mediante la colaboración y el respaldo institucional a las iniciativas adoptadas por esos países para la conformación de sus administraciones pesqueras. También ha participado en la conformación de grupos de trabajo dedicados al estudio de las pesquerías más importantes de la región y en la conformación de una base de datos estadísticos en el ámbito regional, que facilite la preparación de las medidas de ordenación regional. Todo ello en pro del desarrollo económico de los referidos Estados.

Por su parte, la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Ley de Pesca y Acuicultura, puesta en vigor en noviembre de 2001, ha hecho un llamamiento específico a las embarcaciones de bandera nacional a cumplir con las medidas internacionales de conservación y ordenación de los recursos vivos, tal como lo señala su artículo No. 65. Esta tarea expresamente está encomendada, a través de la ley, al Instituto Nacional de Pesca.



En el ámbito nacional, se ha llevado a cabo un control de las operaciones de los buques pesqueros de bandera nacional que faenan en alta mar, mediante la remisión periódica de reportes a las comisiones de ordenación previstas en dicha Ley. La comunicación permanente con estos organismos ha permitido conocer con precisión las zonas de operación de las embarcaciones nacionales y el grado de cumplimiento de éstas en cuanto a las disposiciones que, en materia de ordenación de recursos, se han establecido.

Por su parte, las medidas para enfrentar la problemática derivada de la pesca ilegal, no reportada y no controlada, son aplicadas por Venezuela mediante el reporte regular a las comisiones de la relación de embarcaciones con pabellón nacional que se encuentran operando en condiciones de ilegalidad en aguas internacionales jurisdiccionales de otros países. La Ley de Pesca y Acuicultura prevé la instalación de equipos o dispositivos de posicionamiento en los buques pesqueros mayores de 30 unidades de arqueo bruto, así como la utilización de observadores a bordo debidamente autorizados, con el objeto de recopilar la información necesaria sobre las actividades pesqueras, de acuerdo a la citada Ley. Este instrumento jurídico también contiene las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento por parte de los buques pesqueros venezolanos de las medidas de conservación y ordenación.

Con relación a la capacidad pesquera, el Gobierno de Venezuela ha destacado en los diferentes foros de los cuales es parte su disposición de mantener su capacidad de acarreo en los niveles actuales. Asimismo, ha exhortado a los demás Estados miembros y países colaboradores de las organizaciones que antes citamos a encontrar puntos de consenso que permitan avanzar hacia la limitación efectiva de la capacidad de la flota, conforme a lo acordado en el Plan de acción internacional para la ordenación de la capacidad pesquera de la FAO, a fin de garantizar la conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible de las distintas pesquerías a largo plazo.

Los tópicos relativos a las medidas de conservación de los ecosistemas y del medio ambiente en los cuales se desarrollan las especies transzonales y altamente migratorias permiten referir que los acuerdos, en los cuales Venezuela es parte, contienen disposiciones sobre los esfuerzos que los Estados deben realizar para mantener la sostenibilidad del medio ambiente marino en armonía con las especies que en él habitan. En vista de ello, el país acoge tales decisiones y propicia, a

través de su marco legal, la protección del medio ambiente acuático y de los recursos vivos que en él se distribuyen.

Asimismo, se considera de especial prioridad la preservación de ecosistemas, en el sentido de que su utilización no altere de manera irracional su productividad natural y su estabilidad básicas, sino que sean explotados bajo el criterio de que puedan mantener una pesca sostenible.

En tal contexto, expresamos que las razones que han impedido que Venezuela sea parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluido el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la referida Convención de 10 Diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, aún persisten en el tiempo.

Por tal motivo, mi delegación no se encuentra en posición de compartir con los Estados que apoyan el contenido del referido proyecto de resolución, por cuanto la República Bolivariana de Venezuela no es parte en el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la referida Convención de 10 Diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias ni tampoco le son aplicables las normas de dicho Acuerdo a título de derecho consuetudinario internacional, salvo aquellas que expresamente la República Bolivariana de Venezuela hubiera reconocido o reconociera en el futuro, mediante la incorporación de éstas a su legislación interna.

Una vez dicho lo anterior, mi delegación desea manifestar que no obstaculizará el consenso en torno al proyecto de resolución presentado en este Salón. No obstante, ratifica su posición histórica con relación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus acuerdos conexos al considerar que algunos aspectos contenidos en el proyecto de resolución inducen a mi delegación a realizar una reserva expresa de dicho documento.

**Sr. Llanos (Chile):** Mi delegación quisiera hacer una declaración en relación con el contenido del párrafo 66 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la pesca sostenible, que figura en el documento A/59/L.23 sobre el cual se adoptará una decisión.

Chile se suma al consenso en el entendido de que, conforme a los derechos de soberanía y jurisdicción que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce a los Estados ribereños en su zona económica exclusiva, corresponde a éstos, conforme a sus circunstancias, considerar las medidas de conservación y manejo sustentable acorde con la mencionada Convención y el derecho internacional.

**Sr. Zanelli** (Perú): El Perú desea hacer una declaración en relación con el párrafo 66 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el documento A/59/L.23. El Perú se suma al consenso con respecto a este proyecto de resolución, en el entendido de que, conforme a los derechos de soberanía y jurisdicción que el derecho internacional reconoce al Estado ribereño, corresponde a éste considerar las medidas de conservación y manejo sostenible correspondientes, de conformidad con el derecho internacional.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Hemos escuchado al último orador en explicación de voto antes de la votación. La Asamblea tomará ahora una decisión sobre los proyectos de resolución A/59/L.22 y A/59/L.23, en su forma enmendada oralmente.

Procederemos primero a examinar el proyecto de resolución A/59/L.22, titulado “Los océanos y el derecho del mar”.

Tiene la palabra el representante de la Secretaría.

**Sr. Botnaru** (Jefe de la Subdivisión de Asuntos de la Asamblea General) (*habla en inglés*): Quiero informar a los miembros que, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6, 17, 29, 32, 73, 74, 86 y 90 del proyecto de resolución A/59/L.22, la Asamblea General pediría al Secretario General que mejorara el Sistema de Información Geográfica existente y que le diera la debida publicidad; pediría al Secretario General que convocara la 15a Reunión de los Estados Partes en la Convención en Nueva York, del 16 al 24 de junio de 2005, y que proporcionara los servicios necesarios; aprobaría la convocación por el Secretario General del 15º período de sesiones de la Comisión, en Nueva York, del 4 al 22 de abril de 2005, y del 16º período de sesiones de la Comisión, del 29 de agosto al 16 de septiembre de 2005, en el entendimiento de que la Comisión dedicaría las semanas segunda y tercera de cada período de sesiones a cuestiones técnicas; pediría al Secretario General que, en cooperación con los Estados y las organizaciones e instituciones internacionales pertinentes, considerara la posibilidad de preparar y

ofrecer cursos de capacitación; decidiría establecer un Grupo de Trabajo ad hoc oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina y pediría al Secretario General que le informara al respecto, en su sexagésimo período de sesiones, en el contexto de su Informe sobre los Océanos y el Derecho del Mar; y pediría al Secretario General que convocara el segundo Taller Internacional sobre el proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos, del 13 al 15 de junio de 2005, y que convocara la sexta reunión del proceso de consultas en Nueva York del 6 al 10 de junio de 2005.

En lo que respecta a las necesidades de servicios de conferencias para las reuniones previstas a que se hace referencia en los párrafos 17, 29, 86 y 90, cabe observar que en el proyecto de calendario revisado de conferencias y reuniones para 2005 ya se han programado esos períodos de sesiones. Por consiguiente, no sería necesario asignar recursos adicionales.

Con relación al segundo Taller Internacional, se entiende que la Reunión de Estados Partes se reducirá en tres días. Por consiguiente, el segundo Taller internacional se reunirá durante los tres primeros días de las fechas que originalmente se asignaron y aprobaron para la 15ª Reunión de los Estados Partes, del 13 al 24 de junio de 2005. Por ende, la celebración del segundo Taller Internacional, del 13 al 14 de junio, no tendrá repercusiones adicionales para los servicios de conferencia, siempre que el total de documentación e interpretación del taller y de la Reunión de Estados Partes no exceda el asignado y aprobado originalmente para la Reunión de Estados Partes.

En cuanto a los párrafos 6, 32, 73 y 74, los servicios sustantivos requeridos ya se han incluido en el programa de trabajo del subprograma 4, “Derecho del mar y asuntos oceánicos”. Por consiguiente, si la Asamblea General aprobara el proyecto de resolución A/59/L. 22, no se crearían necesidades adicionales de asignación de recursos en el presupuesto por programas para el bienio 2004-2005.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Antes de proceder a tomar una decisión sobre el proyecto de resolución A/59/L.22, quiero anunciar que desde que se presentó dicho proyecto de resolución, los siguientes países han pasado a ser patrocinadores: Australia,

Belice, Camerún, Croacia, Alemania, Indonesia, Jamaica, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Polonia, Federación de Rusia, Santa Lucía, Samoa, Sierra Leona y Ucrania.

Se ha solicitado votación registrada.

*Se procede a votación registrada.*

*Votos a favor:*

Argelia, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Djibouti, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Islandia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Letonia, Jamahiriya Árabe Libia, Liechtenstein, Lituania, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauricio, México, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Mongolia, Marruecos, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Nigeria, Omán, Pakistán, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Federación de Rusia, Samoa, San Marino, Arabia Saudita, Senegal, Serbia y Montenegro, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Suecia, Suiza, Tailandia, ex República Yugoslava de Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Estados Unidos de América, Uruguay, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

*Votos en contra:*

Turquía.

*Abstenciones:*

Colombia, Venezuela (República Bolivariana de).

*Por 141 votos contra 1 y 2 abstenciones queda aprobado el proyecto de resolución A/59/L.22 (resolución 59/24).*

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Procederemos ahora a examinar el proyecto de resolución A/59/L.23, titulado “La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexos”, en su forma enmendada oralmente.

Tiene la palabra el representante de la Secretaría.

**Sr. Botnaru** (Jefe de la Subdivisión de Asuntos de la Asamblea General) (*habla en inglés*): Quiero informar a los miembros de que, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 16 y 18 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/59/L.23, la Asamblea General pediría al Secretario General que en el primer semestre de 2006 convocara, con arreglo al artículo 36 del Acuerdo, una conferencia de revisión, de una semana de duración, con miras a evaluar la eficacia del Acuerdo, a los efectos de asegurar la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y que prestara la asistencia y los servicios necesarios para la conferencia de revisión; recordaría el párrafo 6 de su resolución 56/13 y pediría al Secretario General que convocara una cuarta ronda de consultas oficiosas de los Estados partes en el Acuerdo con el principal pero no exclusivo propósito, de examinar cuestiones relacionadas con la preparación de la conferencia de revisión, que será convocada por el Secretario General de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo, y de hacer las recomendaciones que correspondan a la Asamblea General.

De conformidad con esas peticiones, hemos previsto que se celebrará un total de 19 sesiones en una semana durante la primera mitad de 2006, en la ciudad de Nueva York. Durante las mismas, habrá interpretación a los seis idiomas oficiales. Los requisitos relativos a la prevención serán de 200 páginas durante la fase anterior a las sesiones, 100 páginas para las sesiones y 100 páginas de documentos posteriores a las sesiones, que se distribuirán en los seis idiomas.

Las fechas exactas de las sesiones se determinarán en las consultas que celebrarán la secretaría

sustantiva y el Departamento de la Asamblea General y Gestión de Conferencias, ateniéndose a la disponibilidad de instalaciones y servicios para las conferencias asignados a la Asamblea General y sus grupos de trabajo, y a condición de que no se reúnan a la vez dos grupos de trabajo de la Asamblea General.

Se estima que las necesidades de los servicios de conferencias para la conferencia de revisión, de cuatro días de duración, prevista para 2006 serían —a costo completo y basándonos en las tasas correspondientes a 2004-2005— 470.600 dólares. Únicamente podrá determinarse a tenor del calendario de conferencias y sesiones para el bienio de 2006-2007 hasta qué punto habrá que complementar las capacidades de la Organización con recursos provisionales de personal temporario. La satisfacción de esas necesidades se examinará en virtud de la sección pertinente para los servicios de conferencias del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2006-2007, no sólo en lo que respecta a las sesiones ya programadas cuando se elaboraba el presupuesto, sino también a las sesiones aprobadas ulteriormente, siempre y cuando el número y la distribución de las sesiones sea coherente con las pautas de las sesiones de los últimos años.

En cuanto al párrafo dispositivo 18, la prestación de servicios sustantivos relacionados con la celebración de una cuarta ronda de consultas oficiosas ya se ha incluido en el programa de trabajo del subprograma 4, titulado “Derecho del mar y asuntos oceánicos”.

Del mismo modo, si la Asamblea General aprobara el proyecto de resolución A/59/L.23, no se necesitarían más recursos del presupuesto por programas para el bienio 2004-2005.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Antes de tomar una decisión sobre el proyecto de resolución A/59/L.23, deseo anunciar que, desde su presentación, los siguientes países se han sumado a la lista de patrocinadores: Camerún, Nauru, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, Samoa y Sierra Leona.

¿Puedo considerar que la Asamblea decide aprobar el proyecto de resolución A/59/L.23 en su forma corregida oralmente?

*Queda aprobado el proyecto de resolución A/59/L.23 en su forma corregida oralmente (resolución 59/25).*

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Antes de dar la palabra a los representantes que deseen inter-

venir para explicar su voto o posición respecto de las resoluciones que acabamos de aprobar, deseo recordar a las delegaciones que las explicaciones de voto no pueden exceder los 10 minutos y que las delegaciones deben efectuarlas desde sus asientos.

**Sr. Nesi** (Italia) (*habla en inglés*): Italia votó a favor del proyecto de resolución A/59/L.22, en virtud del tema 49 a), titulado “Los océanos y el derecho del mar”, pese a que este año no ha patrocinado el proyecto de resolución. Al respecto, Italia quisiera subrayar que le inquieta el párrafo 7 de la resolución. Primero, Italia cree que debería hacerse referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —Convención de Montego Bay— en general, puesto que el artículo 149, además del artículo 303, alude a la protección del patrimonio cultural subacuático.

Asimismo, Italia también cree que debería haberse hecho mención de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La Convención de la UNESCO se negoció y aprobó con el fin de aclarar y mejorar el contenido de las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y para ofrecer un régimen específico y mejorado para la protección del patrimonio cultural subacuático. La Convención de la UNESCO merece ser mencionada en la resolución.

**Sr. Dolatyar** (República Islámica del Irán) (*habla en inglés*): Mi delegación ha votado a favor del proyecto de resolución A/59/L.22. Sin embargo, quisiera dejar claro que mi delegación se desvincula del decimoséptimo párrafo del preámbulo de la resolución, en el que se toma nota del informe del Secretario General titulado “Los océanos y el derecho del mar”, que figura en el documento A/59/62. En el párrafo 28 de ese informe se alude a noticias que, en nuestra opinión, no reflejan con exactitud la situación en el Golfo Pérsico en lo que concierne a la República Islámica del Irán. Pedimos a la Secretaría que rectifique esa deficiencia cuando prepare el nuevo informe sobre el tema.

**El Presidente interino** (*habla en inglés*): Hemos oído al último orador que ha intervenido para explicar su voto. ¿Puedo considerar que la Asamblea General desea concluir su examen del tema 49 del programa.

*Así queda acordado.*

*Se levanta la sesión a las 12.00 horas.*